EL FUNCIONAMIENTO DE LAS NORMAS EN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS (*)

Miguel Angel CIURO CALDANI (**)

1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, aprobada por Argentina según ley 22.765, contiene en su capítulo II importantes “Disposiciones generales” relativas al **funcionamiento** de sus normas y de las normas de los contratos por ellas reglados (1). Dichas disposiciones son relevantes para comprender, sobre todo con miras a su interpretación e integración, cuál es el “**lugar jurídico**” en que se instala la convención (2).

I) El funcionamiento de la convención

2. Dentro del mencionado capítulo II, el artículo 7 aborda el funcionamiento de la **convención** en dos párrafos que disponen respectivamente: 1) que en la interpretación de la **convención** se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional, 2) que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

3. El párrafo primero del referido artículo 7 aborda la problemática de la **interpretación** de la convención. Haciendo un despliegue de interpretación “**paraaauténtica**”, en el sentido que

(*) Comunicación presentada por el autor al XII Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional - VII Congreso Argentino de Derecho Internacional.

(**) Investigador del CONICET. Profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Rosario.

(1) Acerca del funcionamiento de las normas v. por ej. GOLDSCHMIDT, Werner, “Introducción filosófica al Derecho”, 6a. ed., 5a. reimp., Bs.As., Depalma, 1987, págs. 251 y ss.; CIURO CALDANI, Miguel Angel, “Relato sobre el funcionamiento de la norma”, en “Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, N°11, págs. 23 y ss.

En relación con la teoría trialista del mundo jurídico, que sirve de base a esta comunicación, pueden v. además CIURO CALDANI, Miguel Angel, “Derecho y política”, Bs.As., Depalma, 1976; “Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía Política”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1982-84; “Estudios Jusfilosóficos”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1986; “Perspectivas Jurídicas”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1985.

(2) El funcionamiento y las fuentes de las normas son altamente expresivos del “lugar jurídico” de una respuesta.

proviene de los autores pero no se refiere al contenido estricto de normas particulares de la convención, los autores explican el espíritu general de la misma (3). A diferencia de la interpretación estrictamente "auténtica", en esta interpretación, sólo "paraaauténtica", los autores no indican cuál es el sentido concreto de una norma, brindan únicamente el contexto en que las normas han de ser interpretadas.

Se presenta así un fuerte desarrollo del elemento sistemático de la interpretación, ya que una norma aclara el sentido de otras y, además, cierto enfoque del elemento histórico, dado por la motivación expuesta de internacionalidad, uniformidad y buena fe que surge del párrafo comentado, en concordancia con el preámbulo de la Convención. Esos elementos sistemático e histórico son, sin embargo, sólo dos de los datos que han de tenerse en cuenta en la cabal interpretación. Basta recordar que la doctrina tradicional reconoce, además, los elementos gramatical y lógico (4). Decía ya Savigny que si bien en algún caso algún elemento puede no resultar esclarecedor, es indispensable no olvidar ninguno de ellos (5). Aclaraba el ilustre profesor fundador de la Universidad de Berlín que hay que colocarse en el punto de vista del legislador, reproducir artificialmente sus operaciones y recomponer la ley de su inteligencia, para reconstruir el pensamiento contenido en la ley (6). Werner Goldschmidt enseñaba que la interpretación tiene por meta lograr la fidelidad de la norma, o sea que exprese con acierto el contenido de la voluntad de su autor o sus autores (7).

Según hemos señalado, con el párrafo comentado no se llega a una interpretación en sentido estricto, que como tal debe ajustarse a la auténtica voluntad de los autores. Sólo se presentan criterios valorativos para elegir entre las posibilidades interpretativas, que así pueden corresponder o no con lo que realmente se quiso (8).

De resultas de las pautas que remiten al carácter **internacional** de la convención y a la necesidad de promover la **uniformidad** en su aplicación se requiere la opción por soluciones interpretativas simples y guiadas por la conjetura de que puedan resultar uniformes. La interpretación aquí se entrelaza con una tarea del funcionamiento de las normas que no suele recibir la atención que merece: la tarea conjetural. Para que la conjetura sea fundada, hay que tener en cuenta las tendencias interpretativas y las posibilidades de recepción que revela el "Derecho Comparado" (9).

La unificación del régimen internacional de la compraventa de mercaderías a la que se orienta la convención desarrolla una planificación gubernamental de la materia que, como tal,

(3) Otro caso de "paraaauténticidad" es el de la llamada autenticidad meramente decisoria, en que la interpretación proviene de quien ocupa el lugar que tenía quien hizo en su momento la norma interpretada.

(4) SAVIGNY, F. C. de. "Sistema del Derecho Romano actual", trad. Ch. Guenoux - Jacinto Mesla y Manuel Poley, Madrid, Góngora, t. I, 1878, XXXIII y ss., págs. 149 y ss.

(5) Id., pág. 150.

(6) Id., pág. 149.

(7) GOLDSCHMIDT, op. cit., págs. 253 y ss. y 197/198.

(8) Puede v. CIURO CALDANI, Miguel Angel, "Meditaciones trialistas sobre la interpretación", en "El Derecho", t.72, págs. 811 y ss.

(9) En relación con el tema puede v. nuestro estudio "La probabilidad en el Derecho", en "Boletín ..." cit., N°6, págs. 69 y ss. La tarea conjetural tiene un alcance mucho más amplio que el de la mera rectificación de un texto dudoso (puede v. la conjetura en este sentido en SAVIGNY, op. cit., t. I, pág. 171).

cuando está en marcha realiza el valor previsibilidad, y el párrafo que nos ocupa procura que esa previsibilidad se incremente en el funcionamiento de las normas. Es notorio que un proceso de unificación a nivel sólo de tratado podría fracasar en la jurisprudencia. A través de la planificación así garantizada aumentan el orden internacional y correlativamente la coherencia de sus normas.

La unificación del régimen de la compraventa de mercaderías tiende a satisfacer los requerimientos de integración entre justicia y utilidad que plantea en general el Derecho Comercial, y el fraccionamiento de las particularidades nacionales, acortando la relación entre medio y fin como lo exige la utilidad, produce seguridad jurídica. Entre los requerimientos de un régimen justo, la unificación acentúa la igualdad en detrimento de la unicidad.

El mismo párrafo primero del artículo 7 requiere interpretar asegurando la **buena fe** en el comercio internacional (10). La buena fe -o recta intención- puede encararse en sentido más subjetivo, de referencia psicológica, o más objetivo, acerca del comportamiento que ha de asumirse. Por ejemplo, a los fines de la prescripción o del mantenimiento de una adquisición por un tercero suele ser más significativa la buena fe subjetiva, en tanto para el cumplimiento de los contratos suele requerirse más la buena fe objetiva. A su vez, la buena fe puede consistir sólo en el pasivo no promover el daño de otro, sobre todo su engaño, o en el sentido activo de evitarlos. La convención no aclara qué ha de entenderse por buena fe, pero creemos en principio que se trata de la buena fe objetiva y de la combinación de la buena fe pasiva con cierta dosis de buena fe activa. Se plantea aquí un interesante problema de calificaciones.

En cuanto a la dimensión sociológica, la buena fe se relaciona con que la otra parte no quede atrapada en las diferencias que pueden producirse entre su finalidad subjetiva y la finalidad objetiva de los acontecimientos, con que no ignore el curso de las posibilidades y con que no se le oculten las verdaderas características de los repartos en cuanto a repartidores, beneficiarios, objeto, forma y razones sociales. Una zona de especial riesgo para la pérdida de la buena fe es la de las razones alegadas por los repartidores, que pueden ser muy engañosas. La buena fe supone alguna cooperación y cierta solidaridad entre las partes y a través de ellas se incrementa el orden internacional.

En la dimensión normológica la buena fe se muestra, sobre todo, en el correcto funcionamiento de las normas. En la interpretación se trata, de manera principal, de que la interpretación literal no prevalezca sobre la interpretación histórica y que la intención no prevalezca en relación con el fin. En la determinación la buena fe significa que la normatividad determinante no se alce contra la determinada. En la elaboración la observancia de la buena fe supone de modo principal que no se ignoren o produzcan indebidamente las carencias delictivas. En la aplicación se trata a nivel destacado de que no se produzcan encuadramientos desviados y que no se oculten o destruyan los medios para la efectivización de las consecuencias jurídicas.

(10) Acerca de la buena fe v. por ej. TRABUCCHI, Alberto, "Istituzioni di Diritto Civile", 33a. ed., Padova, Cedam, 1992, págs. 488 y ss.

En la dimensión dikelógica la buena fe consiste, por ejemplo, en que no se aprovechen las diversas clases de justicia ni la "pantomía" (11) de este valor para el perjuicio a la otra parte. La buena fe requiere que una superioridad científica o técnica no genere una aristocracia perversa y supone que las partes acepten, en definitiva, una comunidad última de intereses.

La buena fe se evidencia, por ejemplo, en que el sujeto pretenda de la otra parte lo que aceptaría que se pretendiera de él en situaciones análogas y también, de cierto modo, en que no adopte ante situaciones análogas comportamientos diversos.

La exigencia de buena fe "en el comercio internacional" es especialmente calificada por la diversidad de situaciones en los distintos países y por las barreras de información y de comprensión que significa esa internacionalidad. Un mínimo de conocimiento del Derecho Comparado muestra que los estilos jurídicos de los distintos países son muy diferentes y que en estas diversidades la mala fe puede encontrar vasta acogida (12). Quizás valga señalar que la buena fe es indicada para la interpretación y no para la interpretación de los contratos, aunque por la fuerza incontenible de la lógica la influencia pueda proyectarse a esta última.

Un despliegue de la interpretación que merece ser tenido en cuenta es que la convención se refiere, en el segundo párrafo del artículo 7, a la relativa carencia de normas cuando se trate de cuestiones "que no estén expresamente resueltas", de modo que hay que admitir que existen cuestiones que están resueltas de manera tácita. La interpretación extensiva adquiere así más fuerte fundamentación.

4. El párrafo segundo del artículo 7 trata de la **integración** de la convención. Se plantea aquí el supuesto de carencias históricas, en que los casos no estén resueltos en ella y se disponen dos vías de relativa "autointegración". Una es el recurso a los principios generales en los que se basa la convención y, a falta de tales principios, se hace remisión a la ley aplicable en virtud de las normas de Derecho Internacional Privado (13).

El recurso a los principios generales en los que se basa la convención es un caso nítido de autointegración. Sin embargo, se han expresado temores de que este recurso a los principios generales fuese una puerta abierta para la entrada excesiva de la "lex fori".

Los principios generales de la convención surgen en parte de su preámbulo y de las disposiciones de la parte I de la convención ("Ambito de aplicación y disposiciones generales"). Esos principios generales podrían ejemplificarse diciendo que se trata de la formación del nuevo orden económico internacional; la igualdad, el beneficio mutuo y la amistad entre los Estados; la supresión de los obstáculos jurídicos con los que tropieza el comercio internacional; el desarrollo del comercio internacional; la atención a los diferentes sistemas sociales, económicos

(11) Pan=todo; nomos=ley que gobierna.

(12) Puede v. CIURO CALDANI, Miguel Angel, "Filosofía y método del Derecho Comparado", en "La Ley", t. 1989-C, págs. 1080 y ss.

(13) Pueden v. por ej. BOGGIANO, Antonio, "Derecho Internacional Privado", Bs.As., Depalma, 1988, págs. 181 y ss.; GARRO, Alejandro Miguel - ZUPPI, Alberto Luis, "Compraventa Internacional de mercaderías", Bs.As., La Rocca, 1990, págs. 55 y ss.; CALDERON VICO de DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen, "Régimen Internacional de la Compraventa", Santa Fe, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, 1992, esp. págs. 73 y ss.

y jurídicos; la autonomía de las partes; la uniformidad internacional y la buena fe. También se han mencionado la protección de una parte que ha depositado su confianza en la conducta de la otra parte; la obligación de una de las partes de comunicar a la otra todo tipo de información que esta última necesita y la obligación de reducir las pérdidas que derivan del incumplimiento del contrato.

La expresión de esos principios generales en términos de valores puede formularse diciendo que se trata de la coadyuvancia, por integración estrecha, entre la utilidad y la justicia y, mediante contribución entre estos valores y el orden. Este orden se logra en mucho a través de previsibilidad que procura la unificación, pero también en mucho al hilo de la cooperación entre las partes, surgida sobre todo de su autonomía, y de la solidaridad, consagrada en el recurso a los usos y en la exigencia de buena fe.

Pese a la atención a los intereses privados y a los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos, la unificación significa, como dijimos, un despliegue de la comprensión de la justicia en términos de igualdad, y la exigencia de buena fe significa, como hemos señalado, un avance del despliegue de justicia en términos de comunidad. Sin perjuicio de consagrar un amplio juego del humanismo abstencionista, que se manifiesta en la autonomía de las partes, la convención contiene cierto grado de humanismo abstencionista, que llega incluso a la exigencia de buena fe (14).

Pese a la discusión producida al redactarla, la convención indica que a falta de tales principios generales se ha de recurrir a la ley aplicable en virtud de las normas de Derecho Internacional Privado de los Estados contratantes. En este caso, la autointegración asume un carácter muy especial, porque se vale de una normatividad que requiere determinación mediante otro Derecho, la del Derecho Internacional Privado del propio país que resuelve el caso. No se trata de analogía en sentido estricto, porque no hay semejanza siquiera metodológica en los contenidos, pero tampoco es una mera habilitación a los repartidores del Estado referido, porque se supone que normalmente las normas integradoras ya existen. Desde el punto de vista del "subordenamiento" que significa la convención, el envío al Derecho Internacional Privado del país es una heterointegración, pero con miras a todo el ordenamiento de ese país asume mayores rasgos de autointegración.

La pautas de integración contenidas en este párrafo segundo del artículo 7 muestran que, como ordenamiento normativo relativo, la convención está lejos de ser un mero orden y posee relevante sentido sistemático.

La comprensión de conjunto de las mencionadas pautas generales interpretativas e integradoras muestra que las pretensiones de internacionalidad, uniformidad, buena fe e incluso sistematicidad están claramente interrelacionadas, sobre todo en cuanto al afianzamiento del

(14) La nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley aprobatoria de la convención dice "Las cuestiones comprendidas en las materias regidas por la convención que no hayan sido expresamente resueltas en ella se dirimirán según los "principios generales en los que se basa la presente convención" y agrega "En la tarea de individualización de esos principios, cabe destacar que el principio fundamental de la uniformidad en las decisiones debe guiar la adopción de calificaciones o definiciones de los conceptos de la convención y de disposiciones para reglar cuestiones no resueltas. El análisis comparativo y funcional ha de constituir un método conducente."

orden internacional de la compraventa. Estas aspiraciones confluyentes no excluyen el riesgo de que, por interpretaciones diversas, la uniformidad resulte frustrada.

II) El funcionamiento de los contratos

5. El artículo 8 de la convención aborda el funcionamiento de los **contratos**, encarando la difícil problemática que en cuanto a su interpretación plantea la “**infraautenticidad**” (de cierto modo “**semiautenticidad**”, si hay dos partes) en que las interpretaciones de los contratantes difieren. Dice el artículo 8 en su primer párrafo que a los efectos de la presente convención las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención. En esta perspectiva, la interpretación resulta aliviada por el deber de buena fe, de cierto modo de lealtad, que debe reinar entre las partes. Aquí la cooperación contractual muestra su más nítida expresión.

El segundo párrafo del artículo 8 encara la difícil problemática que se plantea cuando no se dan los supuestos del primero. Dice que si el primer párrafo no fuere aplicable las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que le habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte. Ante el no compartirse el conocimiento de la intención por las dos partes, se plantea un marco de cuestiones que, en su dificultad, es de algún modo análogo al de la celebración del contrato entre ausentes y, al fin, refleja obstáculos inherentes a la comunicación humana.

En los casos así planteados puede estarse, de maneras principales, a la intención real de la parte de que se trate; a la intención que debió tener dicha parte; a la intención que le atribuyó realmente la otra parte o la intención que debió atribuirle esta otra parte. Tratando de acercarse más a la “**bilateralidad**” y a la cooperación y apoyándose nuevamente en la consideración de la buena fe la convención se decide por esta última posibilidad (15). De nuevo no se trata aquí de una opción estrictamente interpretativa, sino de la elección de una de las posibilidades interpretativas según un criterio de valor.

El párrafo tercero del artículo 8 establece que para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes. La convención refleja, de este modo, la importancia del elemento histórico de la interpretación y el reconocimiento de la “**pantonomía**” de la finalidad objetiva de los acontecimientos, con sus proyecciones de pasado, presente y porvenir. Así, han de tenerse en cuenta las negociaciones y las prácticas anteriores, los usos y el comportamiento del futuro.

En cuanto a la interpretación de la voluntad de las partes, cabe referirse también al párrafo

(15) El criterio de referirse al sentido que les habría dado la otra parte guarda afinidad, por ejemplo, con la concepción de la justicia de Rawls (v. por ej. RAWLS, John, “A Theory of Justice”, 10a. impresión, Cambridge, Harvard University Press, 1980). Dicho criterio responde en mucho a las viejas reglas haz a los demás lo que querrías que te hicieran a ti, no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti.

segundo del artículo 9, según el cual salvo pacto en contrario se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. Nuevamente aquí surge el reconocimiento del elemento histórico de la interpretación (16).

(16) En relación con la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías vale tener en cuenta la Convención sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías (aprobada según ley 23.916) en la cual, con referencia a los temas abordados en esta comunicación, figuran de manera destacada los arts. 16 y 12, párrafo a).